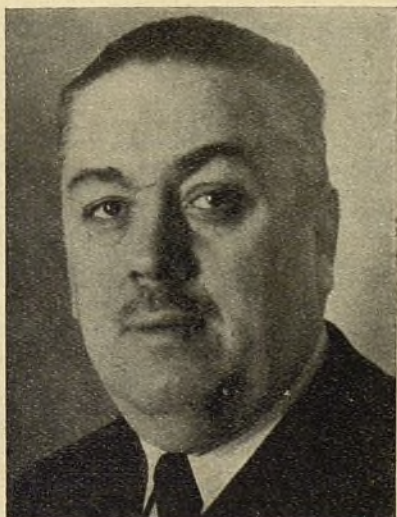


*Páginas para la historia del*

# RENTE POPULAR



POR DIEGO MARTÍNEZ BARRIO  
PRESIDENTE DE LAS CORTES ESPAÑOLAS

---

EDICIONES ESPAÑOLAS • MADRID - VALENCIA 1937  
Ayuntamiento de Madrid

Talleres Gráficos de la  
EDITORIAL RAMÓN SOPENA.  
Empresa Colectivizada. - Barcelona

L  
que  
a co  
L  
clara  
cesar  
y or  
del  
algun  
liber  
del g  
polít  
un c  
acus  
traba  
favor  
In  
lar,  
ñores  
ataqu  
Radio  
L  
bre.  
Azañ  
gen c  
y un  
señor



*Artículos publicados por el Presidente  
de las Cortes Españolas en el diario  
"Crítica", de Buenos Aires.*

I

## LOS ORÍGENES

Los primeros pasos para la creación del Frente Republicano, que había de convertirse más tarde en Frente Popular, se dieron a consecuencia de una torpe maniobra de las derechas.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia había declarado improcedente, en extensa y luminosa resolución, el procesamiento del señor Azaña por los sucesos de octubre de 1934, y ordenado que se le pusiera en libertad. El ilustre ex presidente del Consejo estaba detenido hacía más de dos meses, sin auto alguno de procesamiento, y sometido a dolorosas vejaciones. La libertad del señor Azaña era un rudo golpe a la arbitrariedad del gobierno y una amenaza inmediata al desenvolvimiento de su política. Se trazó sobre la marcha otro plan para inutilizarle, y un día los grupos gobernantes presentaron a la Cámara acta de acusación contra el ex presidente del Consejo por supuesto contrabando de armas, hecho durante el período de su gobierno a favor de los republicanos portugueses.

Inmediatamente, los partidos tomaron posiciones. Acción Popular, Tradicionalistas y Renovación Española, dirigidos por los señores Gil Robles, Domínguez Arévalo y Goicoechea, iniciaron el ataque, bajo la mirada experta y complacida del jefe del partido Radical, ya francamente entregado a los grupos de derecha.

Los republicanos actuábamos separadamente, como de costumbre. De un lado, Izquierda Republicana, dirigida por el propio Azaña; de otro, Unión Republicana, presidida por mí, y al margen de ambas agrupaciones los regionales de Vasconia y Cataluña y un grupo de republicanos independientes, capitaneados por el señor Chapaprieta.

Fueron los debates parlamentarios de gran intensidad dramática. El señor Azaña pronunció un largo y elocuente discurso de exculpación, probando, primero, que la acusación era infundada, y demostrando, después, que el propósito de los acusadores se encaminaba simplemente a enjuiciar y condenar una política de gobierno, al margen de todo acto delictivo. Con el discurso del señor Azaña pasó a segundo término la acusación concreta del contrabando de material de guerra, y quedó frente a frente el problema de la convivencia o incompatibilidad de la coalición gobernante y los partidos republicanos.

Entonces se levantó a hablar el ex ministro de la Lliga Regionalista, señor Ventosa, pronunciando un hábil discurso. Se lamentó de la enorme gravedad que encerraba la lucha enconada de los partidos y la necesidad de reducirla a los términos moderados que reclamaba el interés nacional. Anunció, por último, que su grupo parlamentario se abstendría de votar la acusación contra el señor Azaña. Pero la mayoría no se dejó ganar por tales razonamientos. Tenía la presa cercana y fácil y no ocultó el deseo de cobrarla. Yo creo que los señores Gil Robles y Lerroux vieron el abismo que se abría en la vida de la República y las consecuencias obligadas de la iniquidad que sus partidos cometían, y hasta pienso que las palabras del señor Ventosa no tuvieron otra eficacia que la de afirmarles en el propósito injusto. Estaba larvándose la rebelión contra la República y su ordenamiento legal, y la inutilización del señor Azaña se presentaba como supuesto necesario del éxito. A nombre de la Unión Republicana tercié en el debate. Hice una intervención sobria. Los términos de la acusación y las consecuencias políticas que se derivaban de la maniobra imponían la opción. La reconciliación de los partidos de la mayoría con los genuinamente republicanos se presentaba como imposible. Había que decidirse por una política que, en nombre del gobierno, anunciaba ya su propósito de transformar el régimen, o por la inteligencia sobre nuevas bases de los que habíamos colaborado en 1931 a la implantación de la República. ¿Cabía vacilación alguna? Ni la tuve yo, ni la tuvo el señor Maura, ni la tuvieron los dos diputados que en la Cámara representaban al partido del señor Sánchez Román. Automáticamente se partieron los campos, y de un lado quedaron los grupos republicanos, fundadores de la República, y de otro lado los monárquicos, los neorepublicanos y el partido Radical.

Era el presagio de lo que iba a ocurrir en 1936 al declararse la rebelión militar. Con la República y su gobierno legal, diez de los doce ministros que habíamos constituido el gobierno provisional, los señores Azaña, Largo Caballero, Prieto, de los Ríos,



Domingo, Albornoz, Maura, Casares, Nicolau y yo. Enfrente, los señores Alcalá Zamora y Lerroux.

En la calle tuvieron inmediata repercusión los debates de la Cámara. La presión de las masas republicanas y socialistas sobre sus dirigentes se acentuó, invitándolos a establecer un programa de soluciones políticas que les permitiera recobrar el gobierno y la dirección de la República.

Comenzaron las conversaciones de los jefes republicanos. Día tras día los señores Azaña, Sánchez Román y yo, fuimos forjando y perfilando el compromiso político que, a nombre de los partidos de Izquierda Republicana, Nacional Republicano y Unión Republicana, pensábamos someter a conocimiento y discusión del partido Socialista y, por conducto de éste, al partido Comunista y a la Unión General de Trabajadores.

Se dibujaba ya, con fuertes trazos, la amplitud del área que abarcaría el Frente Popular.

Para que éste naciera con posibilidades de vida robusta se produjeron las condiciones necesarias, porque los republicanos, los socialistas y, en general, todas las clases sociales defensoras de la República habían llegado a la convicción firme de que la coalición de agrarios, cedistas y radicales quería sustituir el régimen democrático y parlamentario, votado en 1931, por uno parecido al de Italia o, a lo sumo, por la ficción republicana del Portugal vecino.

\* \* \*

Los meses de otoño de 1935 consumieron todas las posibilidades legislativas del Parlamento derechista. El 20 de septiembre se declaró en crisis el gobierno de coalición presidido por el señor Lerroux, y el 25 se constituyó otro del mismo trazo político, bajo la presidencia del ex ministro monárquico señor Chapaprieta. La novedad más visible consistió en el desplazamiento del jefe del partido Radical, que de presidente del Consejo pasaba a la cartera de Relaciones Exteriores.

El 29 de septiembre, a consecuencia de la denuncia de un aventurero holandés apellidado Strauss, se produjo otra crisis, la llamada del «straperlo», y el señor Chapaprieta eliminó de su gabinete al propio señor Lerroux y a su lugarteniente más destacado, señor Rocha. Quedaron como base parlamentaria del nuevo Ministerio los partidos de Acción Popular (Gil Robles), Agrarios (Martínez de Velasco) y Liberal Demócrata (Melquíades Álvarez), es decir, las fracciones más derechistas del régimen republicano. Al partido Radical, ya decapitado, se le concedieron unas carteras

para sostener la ficción de su presencia en el Gobierno, pero otorgándolas a personas distanciadas del señor Lerroux.

Tampoco este gabinete gozó de larga vida. Concluyó la suya, muy accidentada, el 9 de diciembre, planteándose entonces con toda crudeza el problema político que desde la primavera venía preocupando al país. Era evidente la infecundidad de las Cortes; público su descrédito y notorio su divorcio de la opinión. Sostener situaciones de gobierno, a base de aquel Parlamento, resultaba empresa de titanes, muy superior a la capacidad de los partidos y a los propios recursos, por demás fértiles, del Jefe del Estado.

Cuando fui consultado durante la tramitación de esta crisis, por mi calidad de ex presidente del Consejo de Ministros, dije categóricamente al presidente de la República que *«no veía otra solución a la crisis planteada que la disolución de las Cortes y la apertura de una consulta electoral, con un gobierno que, por su composición, ofreciera garantías de imparcialidad y adoptase inmediatamente las medidas encaminadas al restablecimiento de la normalidad que para esos fines era imprescindible. Tal solución venía impuesta por la situación interior, agravada y complicada por los últimos acontecimientos, al punto de que cualesquiera que fuesen las dificultades que suscitase una solución como la expuesta, ellas no harían más que agravarse a medida que se demorara, pudiendo tener la dilación repercusiones de gran trascendencia en orden a la composición de la futura Cámara.»*

Como en el ánimo de otros muchos españoles, pesaba ya en el mío la preocupación de que el aplazamiento de la disolución de las Cortes determinaría, fatalmente, una polarización de la opinión pública alrededor de las posiciones más extremadas de la política, tanto más cuanto que era conocido el propósito de ciertos partidos de derecha de no someterse al veredicto electoral, si el resultado les fuera desfavorable.

Desoído el consejo, se constituyó nuevo gobierno el día 14 de diciembre, presidido por otro ex ministro de la Monarquía, el señor Portela Valladares. Volvía a ensayarse la experiencia del gobierno Chapaprieta, aunque con menores probabilidades de éxito. De este gobierno fueron excluidas las minorías más numerosas de la Cámara, Acción Popular y Radicales. A los ministros que procedentes de este último partido quedaron en el gabinete, los desautorizó públicamente el señor Lerroux. Sin base parlamentaria, el Ministerio acordó suspender las sesiones de Cortes, preparándose para la inevitable consulta electoral, resolutoria de una situación insostenible.

Los republicanos habíamos contemplado entristecidos e impo-



tentes el proceso de nuestra propia exclusión y la sustitución de los principios fundamentales del régimen por soluciones y criterios de la Monarquía. En la personalización de los poderes del Estado se llegó a la situación tragicómica de que la Presidencia de la República (Alcalá Zamora), la de la Cámara (Alba) y la del Consejo de Ministros (Chapaprieta) estuvieran ocupadas por tres ex ministros de don Alfonso. (Corrido el tiempo, y en plena rebelión militar, estos tres jerarcas ex monárquicos y neorrepublicanos, habrían de colocarse, más o menos descaradamente, al servicio de la causa facciosa.)

El gabinete Portela del 14 de diciembre fué un gobierno relámpago. Vivió exactamente 16 días. El 30 de diciembre se declaró otra crisis y surgía un nuevo ministerio, presidido también por el señor Portela Valladares. En el gabinete no figuraban ni radicales, ni agrarios, ni liberales demócratas, ni populistas, ni regionalistas, grupos parlamentarios que habían constituido las sucesivas mayorías de las situaciones anteriores. No lo integraban tampoco los republicanos conservadores, unionistas y de izquierda, fundadores, con los socialistas, de la República. La única auténtica representación que ostentaban los ministros era la del jefe del Estado.

Este gabinete tuvo dos misiones esenciales: una, disolver las Cortes; otra, crear desde el poder un partido y un grupo parlamentario que fuera el árbitro de las Cortes futuras.

A rescatar la República de las manos de los monárquicos impenitentes y a nutrir la gobernación del Estado de los principios republicanos, escamoteados, se encaminó entonces el Frente Popular. El pacto suscrito por los partidos republicanos y obreros señalaba el propósito con toda claridad y resolución.

## LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL PACTO

El pacto del Frente Popular se firmó y publicó el día 15 de enero de 1936. Lo suscribieron los partidos Izquierda Republicana, Unión Republicana y Socialista (éste en su propio nombre y en el de la Unión General de Trabajadores), partido Sindicalista, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista y Partido Obrero de Unificación Marxista, no haciéndolo el Partido Nacional Republicano, que presidía el señor Sánchez Román, por diferencias que habíamos creído de fácil reducción, pero que a última hora se convirtieron en obstáculos insuperables.

En ocho apartados se dividieron los principios fundamentales del pacto. El primero enumeraba las medidas necesarias para restablecer la paz pública (amnistía, readmisión de funcionarios y obreros despedidos, pensiones a las familias de los muertos en 1934); el segundo señalaba las reformas que habían de hacerse en las leyes de Orden Público, municipal y provincial, estatuto de funcionarios y reglamento de las Cortes; el tercero abordaba el problema de la redistribución y utilización de la tierra; el cuarto la organización y protección de las industrias; el quinto el desenvolvimiento de las obras públicas; el sexto la ordenación del Banco emisor y de la Banca privada; el séptimo la reorganización de la Hacienda, y el octavo y último la orientación y desarrollo de los planes de enseñanza iniciados al implantarse la República.

Del tono general del documento dan idea los siguientes párrafos:

*«Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por*



los delegados del partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituyen la base más firme de reconstrucción nacional:

PRIMERA.—Como medidas de auxilio al cultivador directo:

Rebaja de impuestos y tributos.

Represión especial de la usura.

Disminución de rentas abusivas.

Intensificación del crédito agrícola.

Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros.

Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.

SEGUNDA.—Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola:

Se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado.

Se trazarán planes de sustitución de cultivos o implantación de otros nuevos con la ayuda técnica y económica de la administración pública.

Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal.

Obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de terrenos para regadíos.

Caminos y construcciones rurales.

TERCERA.—Como medidas para la reforma de propiedad de la tierra:

Derogarán inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos.

Revisarán los desahucios practicados.

Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños.

Dictarán nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad de la tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión; la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.

Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas.

Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.»

Acerca de la restauración de los principios constitucionales, decíamos:

«En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coligados:

PRIMERO.—Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental.

La ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.

SEGUNDO.—Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes provincial y municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando las estructuras y funciones de las comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite informativo de las leyes.

TERCERO.—Se declara en todo su vigor el principio de autoridad, pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.

CUARTO.—Se organizará una justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales Contencioso-Administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el Castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.

QUINTO.—Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas, hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de sus respectivos reglamentos; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servi-



cio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El cuerpo de vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.

SEXTO.—Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones a toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño de tercero público.»

Y no menos categóricas fueron las afirmaciones que señalaban el criterio común en las materias de Hacienda:

«Respecto a la Hacienda se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal, dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo:

1).—Se realizará a fondo la tributación directa, detenida en su desarrollo normal, reorganizándola sobre bases progresivas.

2).—Se reformará la tributación indirecta, buscando la coordinación del gasto privado con el gravamen del consumo.

3).—Se perfeccionará la administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la nueva política tributaria.

La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales y económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero, precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.

No aceptan los partidos republicanos el control obrero solidado por la representación del partido Socialista. Conviene en:

1).—Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias a fin de dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas con objeto de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.

2).—Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia, a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.

3).—Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los tribunales.

Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester, además, organizar administrativa y técnicamente la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadísticas, clasificación, oficinas de colocación y bolsas de trabajo y preocupándose de modo especial del paro en la juventud, sin olvidar tampoco las instituciones de previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.»

¿Cómo acogió la opinión pública este compromiso, que reintegraba al partido Socialista a la normalidad política y colocaba en la corriente legal a los partidos Comunista y Sindicalista?

La aprobación de las masas republicanas y obreras fué ruidosa y se tradujo en felicitaciones y resoluciones que demostraban su entusiasmo. El pacto consagraba sus anhelos de trabajar dentro de la ley y restablecer pacífica y ordenadamente los principios de la República.

Tampoco escatimaron sus elogios los representantes de las fuerzas políticas colocadas al margen de las dos grandes corrientes en que aparecía dividida la opinión española.

A las preguntas de un periodista sobre la impresión que le había causado el pacto de las izquierdas, Miguel Maura, jefe del partido republicano conservador, contestó noblemente: «*Me parece que no podía ser más moderado de lo que es*».

El jefe del gobierno, Portela Valladares, se expresó en forma parecida: «*El manifiesto de los republicanos no ha caído mal. Para la izquierda de la República, el programa que se traza en ese documento no es para asustar. A mí, al menos, me causa ese efecto*».

Ni siquiera los partidos de derecha combatieron a fondo el pacto. Se atrincheraron en la peregrina y errónea afirmación de que existían unas cláusulas secretas, mediante las cuales los partidos republicanos llegaban a concesiones de distinto y superior alcance. La patraña, desmentida por todos los firmantes del Manifiesto, y luego por los acontecimientos, habría de servir para dar aire a la maniobra que, a raíz del triunfo electoral, se consumó contra la República.

El pacto del Frente Popular fué una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquéllos la rápida desintegración de las esencias del régimen, y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno ilegal donde la derecha quería colocarlos, les traería



desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras de Italia, Alemania y Austria.

Una política inteligente y comprensiva, cualquier política estrictamente nacional, habría facilitado la ejecución del pacto del Frente Popular. Dadas las características del país y el profundo desnivel económico de sus clases sociales, las directrices del pacto marcaban un avance en el proceso de incorporar las masas obreras a la gobernación del Estado, sin violencias ni extorsión.

Los republicanos españoles tuvimos planteado el mismo problema que han resuelto ya otras democracias: el de canalizar jurídicamente las aspiraciones del proletariado o lanzarlo fuera de la convivencia constitucional en iracunda peregrinación por la ruta revolucionaria. No me arrepiento de haber procurado que los trabajadores conservaran su fe en la República democrática.

Ése había sido nuestro compromiso y afán cuando el año 30 formamos el Comité revolucionario convertido más tarde en Gobierno provisional. ¿Por qué desandar lo andado y desdecirse de las promesas que con tanta reiteración hicimos? ¿Era lícito allanarse a las exigencias de los reaccionarios y poner media España enfrente de la otra, como en los peores tiempos de la Monarquía?

Toda la medula del pacto del Frente Popular consistía en satisfacer, por vía jurídica, las aspiraciones primordiales del proletariado, y establecer la ordenación constitucional que facilitara la convivencia de los partidos y de las clases.

Necesitábamos una base de trabajo común y con el pacto pudimos lograrla. Necesitábamos el triunfo electoral que nos llevara al poder y lo obtuvimos resonante. Se nos fué de la memoria una enseñanza histórica, y es que las clases privilegiadas de España no se resignan nunca, y cuando se las vence en buena lid apelan a la subversión para restablecer, por medio de la violencia, su tradicional dominio.

### III

## CÓMO LLEGAMOS AL PODER

Las elecciones del 16 de febrero consagraron la victoria política del Frente Popular, pues triunfaron sus candidaturas en las principales capitales españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Asturias y Bilbao. Recuerdo algunas cifras electorales:

Madrid: la candidatura de izquierda obtuvo 226.408 votos. La de derecha, 187.233.

Barcelona: Izquierdas, 244.016; Derechas, 145.435.

Valencia: Izquierdas, 83.645; Derechas, 68.227.

Sevilla: Izquierdas, 95.660; Derechas, 79.189.

Zaragoza: Izquierdas, 41.749; Derechas, 36.562.

Asturias: Izquierdas, 151.631; Derechas, 135.449.

Bilbao: Izquierdas, 67.582; Nacionalistas vascos, 41.620; Derechas, 29.425.

El número de electores, verdaderamente inusitado, que acudió a las urnas, puso de relieve la tensión política del país, ni contenida ni encauzada por el gabinete Portela.

Inmediatamente después de conocidos los resultados electorales, que aseguraban la mayoría absoluta en las futuras Cortes al Frente Popular, empezó a tomar cuerpo un grave problema político. Se temía que el gobierno derrotado produjera su dimisión sin esperar a la reunión de la Cámara. Los periódicos de derecha, que durante la campaña electoral habían hecho objeto al señor Portela de toda clase de vituperios, modificaron su lenguaje y le exhortaron a que permaneciera en el poder. «Ya», órgano vespertino del señor Gil Robles, hizo los siguientes comentarios:

«El Gobierno no puede huir. Ni sería digno ni sería leal. Ha



de rendir cuenta de su gestión. Y el tribunal que puede y debe examinar esa gestión no es otro que las Cortes.

Hasta ellas debe llegar el Gobierno.

Y cuando presente sus credenciales a la Cámara y ésta las acepte o recuse, será el momento de dar paso a otra formación ministerial que se acomode a la situación política de España. Antes, no. Ningún precedente abonaría esta conducta.

Entre los deberes de este instante que hemos querido señalar con toda objetividad, éste del Gobierno Portela nos parece más claro y al mismo tiempo el más indeclinable.»

Los republicanos permanecían a la expectativa. El lunes, 17 de febrero, conocimos la extensión de nuestro triunfo. No sólo en las provincias enumeradas, sino en las de Cádiz, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Jaén, Almería, Córdoba, Alicante, Murcia, Lérida, Tarragona, Gerona, Pontevedra, San Sebastián, Huesca, Teruel y Málaga, las candidaturas del Frente Popular habían logrado la victoria por mayorías aplastantes.

Aparecía dudoso el resultado de otras circunscripciones, pero, desde luego, salvo Navarra y Baleares, los puestos de la minoría se adjudicaban a la coalición de izquierdas, derrotando a los candidatos de centro. Aquel mismo día se supo que los ex ministros Álvarez Mendizábal y del Río; el jefe del partido Radical, Llercux; el subsecretario de la Presidencia, Cámara; el subsecretario del Interior, Echeguren; el ex presidente del Consejo, Samper; el jefe del partido Liberal Demócrata, Melquíades Álvarez; el del partido Agrario, Martínez de Velasco, y los ex ministros Salazar Alonso, De Pablo, Cambó, Vaquero, Burgos Mazo, Usabiaga y Royo Villanova se habían quedado sin acta. Fué el barrido implacable de todo lo que representaba una política vacilante y superficial, incapaz de servir inteligentemente a la República. Al término de los escrutinios permanecían en pie las dos fuerzas políticas auténticas de España: el espíritu liberal y el tradicional. Los vencedores de 1931, que renovaban sus laureles, y los vencidos de la Monarquía y la Dictadura, otra vez condenados a la oposición.

\* \* \*

En las primeras horas de la mañana del martes 18 de febrero de 1936 celebramos Azaña y yo una larga conferencia. Hubimos de examinar detenidamente la situación creada por el triunfo electoral del Frente Popular y la acentuada vacilación y debilidad de que daba alarmantes muestras el gobierno Portela.

Azaña no era partidario de que los republicanos nos encar-

gáramos inmediatamente del poder. Quería esperar a la reunión de Cortes, y aprovechar el intervalo para la preparación articulada, en Decretos y proyectos de ley, de todos los compromisos políticos que constituirían el pacto del Frente Popular. Aunque ganado por sus razonamientos, le manifesté mis dudas en cuanto a la posibilidad de que se pudiera atravesar normalmente tan largo plazo. Desde el 18 de febrero al 16 de marzo, fecha señalada para la reunión de las nuevas Cortes, era de temer que se produjeran muchos y graves sucesos en España.

Pero en un punto nuestra conformidad fué plena. El Frente Popular no realizaría acto alguno que le llevase prematuramente al poder. Dejábamos al gobierno, y sobre todo al presidente de la República, la responsabilidad de adelantar o retardar la entrega inevitable de la gobernación a los partidos triunfantes. Sabíamos que la voluntad política del pueblo, claramente manifestada, estaba de nuestra parte, y eso nos bastaba para observar con calma el desarrollo de los acontecimientos.

La verdad es que éstos no nos concedieron ninguna tregua. Aquella misma tarde fué a mi domicilio, más que intranquilo, descompuesto, el señor Martí de Vesés, secretario político y sobrino del jefe del gobierno. Su tío quería verme urgentemente. Necesitaba que los jefes de los partidos republicanos supieran la realidad de la situación gubernamental y, sobre todo, el estado de su ánimo.

Calmé y despedí al señor Martí de Vesés, y previo acuerdo telefónico con el señor Azaña, anuncié mi visita al presidente del Consejo, fijándola para aquella noche.

Ninguno de los detalles se me han desprendido de la memoria. Portela me recibió en un pequeño despacho de Gobernación, al que hube de pasar atravesando una guardia constituida por el subsecretario, Cámara; el gobernador de Madrid, Morata, y Martí de Vesés. Encontré sobresaltado al presidente. Había recibido varias visitas, que, unidas a las noticias que sin cesar le llegaban de provincias, le tenían muy deprimido.

—«No debo seguir aquí ni un momento más. Ni un momento más»—dijo.

Y como yo le mirara sin contestarle, añadió: —«Háganse ustedes cargo rápidamente del poder, porque yo no puedo responder de nada».

Entre la primera exclamación y la confesión desmayada que hubo de seguirla, entraron en la estancia los generales Pozas y Núñez de Prado. Ambos confirmaron la gravedad de los informes que el presidente poseía. Se encontraban reunidos los jefes de los partidos de derecha y una intensa nerviosidad se acusaba en

los cu  
un ge  
triunfa

Cor  
posibil  
Aquell  
resuelt  
bles p  
que qu  
Le

prepar  
derle.

—«

«Luego

Al

Alcalá

de Fre

¿Lo  
manece

En l

«Du

circulad

actitud

Se c

y algun

Las

fuertas

A la

militar

Este,

ñana de

coronel

tica, el

de men

Y est

«El g

En e

neral Fr

Valladare

gado a s

en relaci



los cuarteles. Al propio ministro de la Gobernación había llegado un general invitando a una acción violenta contra los partidos triunfantes en las elecciones.

Confieso que me faltó convicción para razonar a Portela la posibilidad o conveniencia de que se sostuviera en el poder. Aquella noche no estaba al frente del Ministerio un gobernante resuelto a imponer su autoridad, fueren quienes fueran los posibles perturbadores de la disciplina, sino un hombre acorralado que quería salir a escape de la tragedia en que se veía metido.

Le tranquilicé, relativamente, con la formal promesa de que prepararíamos sin dilaciones el Gobierno que hubiera de sucederle.

—«Pero mañana mismo, mañana. ¿Estamos?»—me repitió—. «Luego puede ser tarde.»

Al día siguiente el Gobierno se declaraba en crisis y el señor Alcalá Zamora encargaba al señor Azaña de formar un Ministerio de Frente Popular.

\* \* \*

¿Los apremios del señor Portela Valladares, su temor a permanecer unos días más al frente del Gobierno, qué origen tenían?

En la Prensa madrileña del día 19 apareció esta información:

*«Durante toda la noche de ayer y la madrugada de hoy han circulado por Madrid alarmantes rumores acerca de una supuesta actitud adoptada por determinados elementos.»*

*Se dijo que habían sido detenidos tres oficiales de Aviación y algunos otros militares.*

*Las autoridades tomaron toda clase de precauciones situándose fuerzas de la Guardia Civil y Asalto en los puntos estratégicos.*

*A las tres y media de la madrugada se dijo que el movimiento militar había abortado.*

*Este, según los rumores, debía estallar a las seis de la mañana del día de hoy. Se dice que han sido detenidos el teniente coronel don Pío Fernández Mulero, jefe de la base de aeronáutica, el teniente coronel aviador Gallarza y dos o tres oficiales de menor graduación.»*

Y esta otra:

*«El general Franco desmiente unos rumores.*

*En el Ministerio de la Gobernación estuvo ayer tarde el general Franco, quien tenía el propósito de visitar al señor Portela Valladares, como jefe del Gobierno, para decirle que habían llegado a sus oídos rumores absurdos sobre determinada actitud suya en relación con un supuesto suceso.*

*Dijo al señor Martí de Veses, secretario político del señor Portela, que tenía interés en hacer constar que él vive completamente ajeno a la política y atento solamente a sus deberes militares.»*

Por pura casualidad, a los cinco meses, el general que no sabía nada de política se erigió en jefe de una sublevación contra la República, y los tenientes coroneles Fernández Mulero y Gallarza figuraban entre los sublevados.

Nada más lejos de la verdad, por tanto, que la historieta de que los republicanos asaltáramos el poder el 19 de febrero. Fuimos a él por imperio de unas circunstancias a las que éramos ajenos, y por el temor personal de un presidente del Consejo a quien se le ccaccionaba para que diera, o dejara dar, un golpe de Estado.

¿Por qué entonces no se sublevaron los militares y los partidos de derecha, preparados, seguramente, para la eventualidad?

Por varias razones, que han demostrado más tarde los acontecimientos. Porque no contaban con la Dirección de la Guardia Civil, desempeñada por el general Pozas, y con la Dirección General de Aviación, que ocupaba el general Núñez de Prado.

Porque el pueblo, alerta, daba señales inequívocas de que se opondría a que se le arrebatara la victoria electoral lograda el día 16.

Y porque a ciertos oídos llegó, desde ciertos labios, la noticia de que el Gobierno del Frente Popular duraría poco, resuelta como estaba la autoridad suprema a dejarlo en la estacada en las primeras de cambio.

DEL M

Las  
poder,  
paz mat  
Poca  
moderac  
«A t  
se dirige  
de la n  
en las e  
El G

pósitos  
libertad,  
blicano

El G  
todos los  
ya los a  
que deb  
en la ob  
bilidad e

Por t  
lar la p  
mantenié  
y tampon  
de gener  
nos muer



#### IV

### LA DESTITUCIÓN DEL PRIMER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Las primeras declaraciones del señor Azaña, al encargarse del poder, señalaron categóricamente el propósito de restablecer la paz material y moral del país.

Pocas veces se habrá expresado un jefe de Gobierno con mayor moderación y buen sentido:

*«A todos los ciudadanos españoles el Gobierno de la República se dirige con palabras de paz, como corresponde al poder legítimo de la nación, constituido en virtud de la voluntad manifestada en las elecciones pasadas.»*

El Gobierno espera que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, al restablecimiento de la justicia, de la libertad, de la vigencia de la Constitución y del espíritu republicano que él tiene desde la hora en que se ha constituido.

El Gobierno de la República tiene el convencimiento de que todos los españoles, sin distinción de ideas políticas y depuestos ya los ardimientos de la contienda electoral, muy legítimos, pero que deben terminar cuando la contienda cesa, han de cooperar en la obra que el Gobierno trata de emprender con su responsabilidad exclusiva.

Por tanto, esperamos que los que nos han ayudado a reinstalar la política republicana sean nuestros primeros colaboradores, manteniéndose dentro de la ley, no perturbando la paz pública y tampoco malogrando la victoria por motivos de impaciencia o de generosa prestandia en la consecución de los fines que a todos nos mueve.

El Gobierno añade a esto que no está movido de ningún propósito de persecución y vesanía. Los rencores, con la responsabilidad del poder, no existen. Ninguna persecución se ha de tomar por parte del Gobierno, siempre que todo el mundo se mantenga dentro de la ley. Nosotros no conocemos más enemigos que los enemigos de la República y de España, y no tenemos que perseguir a nadie mientras se limite al cumplimiento de los derechos que la Constitución nos concede a todos. Sólo el que viole la ley, el que no esté en paz con la ley, con las autoridades, con él, podrá temer el rigor del Gobierno, que, en ningún caso, tampoco se saldrá de lo que demanden sus deberes.

Nuestro lema es: defensa de la República, República restaurada, y, por consiguiente, prosperidad, libertad y justicia en España. Unámonos todos bajo esta bandera, en la que caben los republicanos y los no republicanos y todo el que, ante todo, sienta el amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida.»

Desgraciadamente, estas palabras no encontraron el debido eco. Falange Española, organización de tipo francamente revolucionario, que había reunido muy pocos millares de votos en las elecciones de febrero, empezó a crecer de modo alarmante. Se precipitaron en sus filas las masas desechadas del partido de Gil Robles, los residuos de los Sindicatos Libres, que organizó, el año 20, el general Martínez Anido, y los militares voluntariamente retirados el año 31, quienes, a pesar de su condición de pensionistas privilegiados, añoraban las dulzuras del antiguo mando. Por un instante, al celebrarse las primeras sesiones de las Cortes, pudo abrigarse la esperanza de que el buen sentido venciera la pasión exasperada de los partidos. La elección de la Mesa de la Cámara reunió las voluntades de todos los grupos, y yo, que fuí el candidato del Frente Popular a la Presidencia, obtuve 386 votos de los 397 diputados que tomaron parte en la elección. La tregua duró tan sólo unos días. Soplaban demasiado fuerte el viento de la calle para que se abriera camino cualquier política de pacificación y reconciliación.

No fué extraño que el debate sobre la disolución de las Cortes anteriores se iniciara en un ambiente de recelo. La derecha y la extrema izquierda habían fijado durante la campaña electoral su posición acerca del problema planteado por el propio presidente de la República en el decreto de convocatoria. Ambas fuerzas políticas estimaban que la disolución de la Cámara era la segunda realizada por el presidente, quedando con ello extinguida, a estos efectos, sus facultades constitucionales.

Pero el resultado de las elecciones cambió el panorama. La

Cámaras  
más n  
asegura  
desde  
de la l

Adem  
al Gob  
cultad  
político  
mayor  
no se  
como u  
Estado.

Tal  
del Fre  
contrar  
ya hab  
rogativ

La  
yoría,  
casos e

Este  
política

«El  
con car

Podr  
legislatu  
días en  
tuado e

El p  
máximo  
dose a l

a) I  
b) A

las nuev

En e  
Cortes s  
lución d  
soluta d

La r  
blema:  
ción. Pa  
apartado

«Para



Cámara elegida tenía una fuerte mayoría de izquierdas, y nada más mortificante para los partidos derrotados que esa Cámara asegurara una larga existencia, por lo menos la que mediaba desde su constitución a la terminación del mandato del presidente de la República.

Además, conocida la mala voluntad del señor Alcalá Zamora al Gobierno del Frente Popular, no convenía privarle de la facultad de promulgar otro decreto de disolución. A este criterio político ajustó la derecha su intervención en el debate, y con mayor o menor rebozo se acogió a la tesis presidencial de que no se le computara la disolución de las Cortes Constituyentes como una de las dos a que la Constitución autorizaba al jefe del Estado.

Tal rectificación de principio avivó el recelo de los partidos del Frente Popular y les afirmó en el propósito de declarar lo contrario, es decir, que con la disolución de las anteriores Cortes ya había ejercido el presidente de la República dos veces su prerrogativa.

La votación de la Cámara aceptó esta doctrina por gran mayoría, y yo tuve que cumplir los trámites señalados para estos casos en el artículo 81 de la Constitución.

Este artículo, rápidamente convertido en clave de la ulterior política de la República, dice:

*«El presidente de la República podrá convocar al Congreso con carácter extraordinario, siempre que lo estime oportuno.»*

*Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el artículo 58.*

*El presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:*

a) *Por decreto motivado.*

b) *Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días.*

*En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará anexo la destitución del presidente.»*

La resolución de la Cámara planteó seguidamente otro problema: el de determinar si había sido o no necesaria la disolución. Para abrirle cauce procedí a ejecutar lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 106 del Reglamento del Congreso:

*«Para la debida garantía no cabrá tratar del asunto sino anun-*

*ciando su planteamiento con antelación de tres días, citación general y señalamiento de la hora en que el debate ha de comenzar.»*

Mi deber estaba claro y lo cumplí. El viernes 3 de abril adoptó la Cámara el acuerdo de declarar que la disolución de las anteriores Cortes era la segunda de las dos que podía hacer el presidente de la República, y para el martes 7, a las cinco de la tarde, convoqué yo la reunión prevista en el artículo 106 del Reglamento.

En el ejercicio de su derecho, las Cortes iban a encararse con el primer Magistrado de la nación.

\* \* \*

Desde el sábado empezaron a circular por Madrid graves noticias relacionadas con la actitud del presidente de la República. Se decía por algunos que tenía preparado un mensaje presentando la dimisión, y, por otros, que, creyendo nulo el acuerdo de la Cámara, no pensaba acatarlo. Pero la opinión más generalizada era la de que se disponía a disolver el Parlamento, haciendo uso del derecho que aun creía poseer y que las Cortes le negaban.

Todos estos rumores, llegados a mí por diferentes conductos, me produjeron viva preocupación. Decidí interrogar a la esfinge e intentar que se reconciliara con el Gobierno y se sometiera al Parlamento.

Concedida que fué la audiencia, me trasladé a Palacio. No sabía yo que aquella era la última vez que habríamos de encontrarnos y que 48 horas más tarde, por exigencias indeclinables del deber, estaría yo ocupando su puesto.

A las pocas palabras planteé el problema de frente al señor Alcalá Zamora. Díjele que el acuerdo de la Cámara lo estimaba perfectamente legal y constitucional, y que el bien del país y la tranquilidad de la República imponían de su parte un completo acatamiento. No hizo objeción alguna, si bien tampoco mostró la menor conformidad a mi tesis. Lo único visible de su actitud fué el deseo de que yo diera por terminada la entrevista.

Agotado el tema, llevé la conversación a otro terreno igualmente resbaladizo: el de sus relaciones con el Gobierno. No es posible—le afirmé—que el jefe del Estado y el Gobierno responsable vivan en franca oposición. De su antagonismo se resienten todos los negocios públicos, y en las diferencias, bien conocidas, encuentra la opinión imparcial motivo de desasosiego, y los adversarios argumentos para sus campañas. Ningún régimen resiste la carcoma interior, máxime cuando carece de la fortaleza que dan los siglos.

El  
que yo  
—N  
Desde  
o sea e  
Lo pel  
bierno  
pliando  
que ob  
de la F  
las ley  
Hizo  
despedi  
sus pal  
sado. I  
los par  
enlazar

Los  
Hervía  
espuela  
cuando  
partidos  
Cortes  
la desti  
Poca  
Cortes,  
ra. Post  
¿Fué le  
gidos p  
omitirse  
mento e  
contra  
disolver  
de izqu  
y los co  
anterior  
la desti  
Impl  
cposición  
Catalana



El Presidente reaccionó con violencia —¿Usted cree—dijo— que yo soy culpable de esas diferencias?

—No se trata de eso—contesté—. El problema es distinto. Desde mi punto de vista, carece de importancia que sea usted o sea el Gobierno quien se encuentre asistido y cargado de razón. Lo peligroso es la ruptura en sí, tanto más, cuanto que el Gobierno goza de la absoluta confianza de la Cámara y actúa cumpliendo un programa político, refrendado por el voto popular, que obliga a todos, al Ministerio que lo desarrolla y al Presidente de la República, que constitucionalmente, a medida que se voten las leyes, deberá promulgarlas.

Hizo un gesto el señor Alcalá Zamora, y con otro amable de despedida, se encaminó y me encaminó a la puerta. Más que de sus palabras, de su actitud deduje que mi esfuerzo estaba fracasado. Dejaba en Palacio, no al árbitro imparcial por encima de los partidos, sino al beligerante impetuoso, que no sabiendo desenlazar el nudo, se disponía suicidamente a cortarlo.

\* \* \*

Los rumores pesimistas se acentuaron la mañana del martes. Hervía la calle y, como de costumbre, empezaban a sonar las espuelas y los sables en los cuarteles. A las cuatro de la tarde, cuando llegué al Congreso, el Gobierno me hizo saber que los partidos de la mayoría iban a declarar que la disolución de las Cortes anteriores no había sido motivada, y acordar, por tanto, la destitución del Presidente de la República.

Pocas horas más tarde, después de un debate dramático, las Cortes, por 238 votos contra 10, destituían al señor Alcalá Zamora. Posteriormente se ha discutido mucho este acto de la Cámara. ¿Fué legal? Evidentemente, porque ninguno de los requisitos exigidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso hubo de omitirse. ¿Fué un acto moral? También lo fué, desde el momento en que el Presidente dejó entrever una actitud de rebeldía contra la resolución parlamentaria que le privaba del derecho a disolver otra vez las Cortes. Así lo entendieron los republicanos de izquierda, los nacionalistas vascos y catalanes, los socialistas y los comunistas, e incluso los centristas agrupados en torno del anterior presidente del Consejo, señor Portela, y por ello votaron la destitución.

Implícitamente así lo estimaron también los partidos de la oposición, Acción Popular (Gil Robles), Agrarios (Cid) y Lliga Catalana (Ventosa), absteniéndose de votar. Al Presidente desti-

tuído no le asistieron con su confianza más que diez diputados, exiguo resto de aquella entusiasta votación que cinco años antes lo había elevado a la dirección de la República.

\* \* \*

Mi interinidad empezó el 8 de abril y terminó el 11 de mayo. Los primeros en reiterar su adhesión y la de las fuerzas que mandaban, fueron los generales Goded, Franco, Cabanellas, Villabrilles, Molero, Sánchez Ocaña y el coronel de la Comandancia de Asturias, Aranda. Tampoco anduvo perezoso el inspector del Cuerpo de Carabineros y consuegro del Presidente destituido, general Queipo de Llano, quien, no creyendo suficiente la adhesión escrita, me pidió audiencia y se presentó en Palacio el día que le citaron. Entre la miel de sus palabras y la policromía de sus cruces, cintas y otras presea, cualquiera menos descontentadizo que yo se hubiera emocionado.

El Cuerpo diplomático y el elemento civil también hicieron acto de presencia. Para todos, la legitimidad de mi autoridad era indiscutible. El Presidente interino de la República ocupaba la más alta Magistratura, no por un acto de violencia, sino en cumplimiento de un mandato terminante de la Constitución.

¿Podrían faltar los partidos políticos a esta convalidación moral del despido del señor Alcalá Zamora? No faltaron tampoco. Un día me visitó el señor Maura; otro, el señor Portela; más tarde, el jefe del grupo Agrario, señor Cid; luego, el ex ministro de Acción Popular, señor Jiménez Fernández; por último, el señor Gil Robles. Ni siquiera el doctor Marañón se creyó eximido del deber, que me significó como muy grato, de pasar a saludarme. Es posible que alguno de mis ilustres visitantes se haya arrepentido de que su testimonio personal, presentándose en Palacio, sirva hoy para desvanecer la leyenda de que las instituciones de la República se montaron en verdadera ilegitimidad el día 8 de abril, pero yo sigo rindiéndoles gratitud. Cuanto han hecho después, no ha podido suprimir lo que hicieron antes, y el acto voluntario de sometimiento a la representación personal de la República que habrían de combatir airadamente al lado de los rebeldes más tarde, permanece acusador y aleccionador. Fué la pequeña huella histórica, que no borran todas las aguas del Océano.

Al I  
Asamble  
número  
fin. El  
y 473  
parte 8  
754 vot  
rroux,  
de Rive  
Vota  
pular, lo  
radicales  
y los ag  
pular (p  
como el  
abstenci  
de la Re  
las garan  
concurs  
quicos d  
Al di  
se declar  
acudiend  
rios de l  
Portela,  
caron su  
Acción P



## LA REBELIÓN MILITAR

Al Presidente de la República española se le elige en una Asamblea especial constituida por los diputados a Cortes y un número igual de compromisarios votados exclusivamente para este fin. El número total de electores es el de 946, o sea 473 diputados y 473 compromisarios. En la elección del 11 de mayo tomaron parte 847, y el resultado fué el siguiente: don Manuel Azaña, 754 votos; don Ramón González Peña, 2; don Alejandro Lerroux, 1; don Francisco Largo Caballero, 1; don Miguel Primo de Rivera, 1, y en blanco, 88.

Votaron al señor Azaña, además de los grupos del Frente Popular, los nacionalistas vascos, los republicanos conservadores, los radicales, los liberales demócratas, la Lliga Regionalista catalana y los agrarios. Los votos en blanco correspondían a Acción Popular (partido de Gil Robles) y a alguno que otro monárquico, como el conde de Romanones, que no quiso sumarse al acuerdo abstencionista de sus correligionarios. La elección del Presidente de la República fué, por tanto, un acto normal rodeado de todas las garantías que señala la Constitución, y al que prestaron su concurso la totalidad de los partidos españoles, salvo los monárquicos de las dos ramas y los anarquistas.

Al día siguiente de posesionarse de su cargo el señor Azaña se declaró la crisis, y el Presidente comenzó las consultas de rigor, acudiendo a ellas, además de los jefes de los grupos parlamentarios de la mayoría, los de la oposición, señores Maura, Ventosa, Portela, Gil Robles y Cid. De esta forma, el 12 de mayo ratificaron su lealtad al régimen republicano los partidos fronterizos, Acción Popular, representada por Gil Robles; los Agrarios, por

Cid, y la Lliga Catalana, por Ventosa. Desgraciadamente, esa lealtad se marchitó pronto, porque el 19 de julio se colocaron a las órdenes de los generales sublevados, no para defender la República, sino para hundirla.

Usando de su prerrogativa, el señor Azaña confió el encargo de formar Gobierno a don Santiago Casares Quiroga, y el nuevo ministro se presentó seguidamente a las Cortes. En ellas, por una gran mayoría, obtuvo el necesario voto de confianza, con lo cual todos los órganos del Estado se nutrieron de pleno poder. Y eso era España el 18 de julio, al sublevarse los funcionarios militares: un Estado legal, con su Presidente elegido constitucionalmente; con un Parlamento legítimo, y con un Gobierno poseedor de las dos confianzas exigibles: la de la Cámara y la del Presidente de la República.

Los que afirmaron que la sublevación se hizo contra unas Cortes facciosas, un Presidente usurpador y un Gobierno ilegal, habían perdido desdichadamente la memoria.

Sería cruel que yo insinuara que para los hombres de honor habían perdido algo más.

\* \* \*

Ya es conocido el hecho de que la sublevación militar tuvo una larga gestación y suerte muy variada. Se iniciaron los trabajos subversivos el año 35, con el fin de impedir la vuelta al poder de los partidos republicanos de izquierda. El general Sanjurjo, sublevado el día 10 de agosto de 1932, indultado, primero, de la pena de muerte que le impuso un Consejo de Guerra y amnistiado después por las Cortes, púsose al frente de los conspiradores, dándonos una lección ejemplar sobre las calidades morales de los príncipes de la milicia española.

Desde sus comienzos, la rebelión militar se procuró un aliado civil, audaz y poco escrupuloso. Todas las sublevaciones necesitan crear un clima propicio que les granjee el respeto, o la neutralidad, al menos, de la sociedad donde han de desarrollarse. El brazo civil del general Sanjurjo facilitó esa obra. Deshonró al Estado y amedrentó a la sociedad, sembrando el terror.

El 12 de marzo, a la salida de su domicilio, el catedrático de la Universidad Central, don Luiz Jiménez de Asúa, fué agredido a tiros por un grupo que le esperaba. El señor Jiménez de Asúa resultó ileso, pero un agente de policía que le acompañaba, don Jesús Gisbert, quedó muerto en mitad de la calle,



El día 15 del mismo mes varios desconocidos tirotearon la casa del diputado socialista señor Largo Caballero, a la hora en que éste solía regresar del Congreso.

El 7 de abril un mozalbete llevó al domicilio de don Eduardo Ortega y Gasset, gobernador de Madrid con la República, un cesto de fruta. A los pocos minutos estallaba una bomba, destrozando la vivienda del señor Ortega.

El 13 de abril otros desconocidos mataron a la puerta de su casa al magistrado del Tribunal Supremo don Manuel Pedregal, que había sido ponente en la causa instruida por el atentado contra Jiménez de Asúa.

El 14 de abril, aniversario de la proclamación de la República, se hizo estallar una traca al lado de la tribuna donde se encontraban presenciando el desfile de la guarnición el Presidente de la República y el Gobierno. Al pie de la tribuna fué detenido un comandante de Artillería, que, pistola en mano, se disponía a lanzarse sobre el jefe del Estado.

El 7 de mayo los desconocidos de turno asesinaron al capitán de Artillería don Carlos Faraudo, instructor de las Milicias socialistas.

El 8 de mayo, a varios individuos apostados en un automóvil ante la puerta del domicilio del ex ministro señor Álvarez Mendizábal, se les encontraron pistolas ametralladoras y otras armas que pensaban utilizar, según dijeron, contra el desafortunado ex ministro.

Durante el mes de junio el ambiente siguió saturándose de violencia. Los partidos se increpaban furiosos, imputándose mutuamente los propósitos más horrendos. Al Gobierno se le avisaron los peligros, y yo, desde el sillón de presidente de la Cámara, exhorté una y otra, y cien veces, a la concordia.

Todo inútil. El brazo civil de la sublevación había desempeñado su papel concienzuda y eficazmente. Ya estaba creado el clima moral y la sociedad esperando estremecida la explosión última.

Un día, el 13 de julio, mataron a tiros al capitán de Asalto señor Castillo, fervoroso republicano. Aquella misma noche, de madrugada, otros hombres sacaron de su domicilio al señor Calvo Sotelo y lo asesinaron.

Los generales de los telegramas de adhesión y de las protestas de fidelidad a la República, creyeron la hora propicia y se lanzaron a la revuelta.

\* \* \*

Desde su nacimiento, la rebelión militar se caracterizó por la hipocresía y la crueldad. Ni uno solo de los militares sublevados dijo que se alzaba contra la República, ni siquiera contra el Gobierno, sino en previsión de una revolución comunista que consideraban cercana.

Duró la farsa los días precisos para sustituir a las pobres autoridades civiles, tan amedrentadas como sorprendidas, y encarcelar a los dirigentes del republicanismo y de las clases obreras. Luego se suprimieron, al término de las emisiones de radio, el himno nacional y los vítores á la República, y por último se restableció la bandera de la Monarquía y la marcha real.

Los militares españoles se han sublevado, a lo largo de la historia, muchas veces, y algunas con éxito que todavía nos avergüenza. Pero aquellos generales del siglo XIX, cuando se levantaban contra Isabel II, no lo hacían, ciertamente, al grito de ¡viva la reina! Jugaban limpio, como es costumbre entre caballeros. Ahora, no.

El 19 de julio la sublevación declaró un objetivo (defensa contra el comunismo), y a mediados de agosto otro (sustitución de la República por las instituciones de la España tradicional). A fines de 1936 ninguna de estas interpretaciones se sostenía tampoco en pie. La cruda realidad es que nos encontrábamos ante una invasión extranjera, preparada por militares españoles, dirigida en lo interior a procurarse una hegemonía política y en lo exterior a debilitar la posición internacional de las grandes democracias occidentales. La pública declaración de los propósitos hizo que el movimiento nacionalista se perdiera entre las sombras. Sobre el tapete quedaron España, con su voluntad soberana de nación independiente, y el extranjero resuelto a imponer un protectorado económico, político y moral.

\* \* \*

La rebelión se inició tácticamente como una expedición punitiva cruel. No hablemos de los hombres civiles inmolados, ni de los pueblos destruidos o arrasados. Nada de eso cuenta para ciertas mentalidades. Incluso devolverán el cargo, acusando a los partidos leales de idéntico salvajismo. Limitemos el recuerdo al Ejército. De las ocho regiones militares en que está dividida España se sublevaron siete. La primera (Madrid); la segunda (Se-

villa);  
gos); l  
tercera  
y Barce  
que se  
lero y  
fusilado  
en los  
oportun  
general  
traslada  
¿Era  
goberna  
bién? ¿  
Coruña,  
rreus,  
El d  
Molero,  
lealtad a  
Llano y  
Monarqu  
La f  
anuncié  
profética  
de guer  
el salto  
cional».  
¿Y la  
verse? I  
pruebas

Han  
de que  
umbrales  
El mo  
justificaci  
torpes; l  
juegan s  
guerra ci  
histórico,  
Entom



villa); la cuarta (Barcelona); la quinta (Zaragoza); la sexta (Burgos); la séptima (Valladolid) y la octava (Galicia). Quedó leal la tercera (Valencia), y a las pocas horas vencidos y sometidos Madrid y Barcelona. Los generales que mandaban las cinco divisiones que se declararon rebeldes eran Villabrilie, Cabanellas, Batet, Molero y Salcedo. Pues bien, Batet, Molero y Salcedo han sido fusilados, y Villabrilie está preso. Como Cabanellas no figuraba en los primeros momentos entre los conspiradores, no creyeron oportuno llevarlo a prisión, pero en su lugar se detuvo al heroico general Núñez de Prado, que por orden del Gobierno se había trasladado a Zaragoza.

¿Era comunista alguno de estos militares? ¿Lo era acaso el gobernador militar de Granada, general Campis, fusilado también? ¿O los generales Caridad Pita, gobernador militar de La Coruña, y Romerales, jefe de la circunscripción oriental de Marruecos, ambos pasados por las armas?

El delito castigado en los generales Batet, Núñez de Prado, Molero, Salcedo, Caridad Pita, Romerales y Campis fué el de lealtad a su palabra de honor. Horrendo crimen para Queipo de Llano y Cabanellas, especialistas en rebeliones, primero contra la Monarquía y luego contra la República.

La finalidad del movimiento rebelde era previsible. Yo lo anuncié el 8 de enero de 1936 con palabras que han resultado proféticas: *«La violencia de las derechas nos pondrá en trance de guerra civil. Sólo la República puede ser la paz. Lo demás, el salto en las tinieblas. Y, en fin de cuentas, la disolución nacional»*.

¿Y la crueldad, la tremenda crueldad de esta lucha, podía preverse? Mi deber y dolor de español me impiden examinar las pruebas que fijan la principal y primera responsabilidad.

\* \* \*

Han de transcurrir todavía muchas jornadas sangrientas antes de que España se recobre. Pero la verdad ya ha llegado a los umbrales de la Historia e imperiosamente pide su puesto.

El movimiento rebelde contra el Estado español carece de toda justificación legal y moral. Lo iniciaron militares ambiciosos y torpes; lo prosigue el apetito imperial de pueblos extranjeros que juegan su partida política internacional al amparo de nuestra guerra civil. España, desangrada, mutilada, pero fiel a su destino histórico, dirá las palabras finales.

Entonces volverán a abrirse los corazones y Europa respirará.

## INDICE

	<u>Págs.</u>
I.—Los orígenes . . . . .	3
II.—Las ideas fundamentales del pacto . . . . .	8
III.—Cómo llegamos al poder. . . . .	14
IV.—La destitución del primer Presidente de la República. .	19
V.—La rebelión militar . . . . .	25



1  
3  
8  
4  
9  
5



E. E.